



FORMULADO POR EL SR.  
MARIANO RAMIREZ VAZQUEZ.  
FAUSTO VALLADO BERRON.-

Forma A. Núm. 88

DIRECTO NUM. 5360/56/2a.

México, Distrito Federal.- Acuerdo de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Vo.Bo. día diez de marzo de mil novecientos cincuenta y ocho.

VISTO el juicio de amparo directo número 5360/56/2a., promovido por [REDACTED], contra los actos de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito y Territorios Federales y del Juzgado Séptimo de lo Civil en esta capital, que estimó violatorios de los artículos 14 y 16 constitucionales, y que hizo consistir en la sentencia definitiva pronunciada en el toca a la apelación del juicio ordinario civil seguido -- por el quejoso en contra de [REDACTED], y en su ejecución; y,

RESULTANDO:

Primero:- Los antecedentes del caso, según -- las constancias de autos, son los siguientes:

Por escrito de dieciséis de agosto de mil novecientos cincuenta y cuatro, ante el Juez Séptimo de lo Civil de esta ciudad, [REDACTED] demandó en la vía ordinaria civil, de [REDACTED], la disolución del vínculo matrimonial que los unía; la pérdida de la patria potestad sobre su menor hijo [REDACTED]; la disolución y liquidación de la sociedad conyugal; y el pago de los gastos y costas del juicio.- Relató que el once de junio de mil novecientos cuarenta y tres contrajo matrimonio con la demandada; en ese matrimonio procrearon un niño que recibió el nombre de [REDACTED] -- al contraer matrimonio dijeron casarse bajo el régimen de sociedad conyugal, pero lo cierto es que por una omisión-

inexplicable no celebraron capitulaciones matrimoniales, y en esa virtud la sociedad conyugal es inexistente por cuanto no se dijo qué bienes formarían el patrimonio de la misma; su esposa pretende tener participación en los bienes que él adquirió a título gratuito, por herencia, más si no se celebraron capitulaciones matrimoniales que estipularan cuáles bienes formarían el haber social, menos pudo pactarse cosa alguna sobre adquisiciones a título gratuito; anteriormente, el nueve de junio de mil novecientos cincuenta y dos, [REDACTED] le demandó ante el propio Juzgado del conocimiento, la disolución del vínculo matrimonial, la pérdida de la patria potestad sobre su hijo y la liquidación y disolución de la sociedad conyugal; juicio en el que el Juzgado dictó sentencia absolviéndolo de la demanda, en apelación la sentencia fue confirmada por la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia y Territorios Federales, y causó -- ejecutoria por no haberla reclamado [REDACTED], en la vía de amparo; desde la fecha en que el Tribunal dictó su ejecutoria, hasta aquella en que presentaba su demanda, habían transcurrido más de tres meses. Como su cónyuge ejercitó la acción de divorcio y fracasó, nació en su favor una acción concreta para pedir el divorcio, conforme al artículo 268 del Código Civil.

La demandada contestó negando que al casarse con el actor sólo hubiesen dicho que lo hacían bajo el régimen de sociedad conyugal, pues la verdad es que se casaron bajo este régimen, tal y como consta de la solicitud de matrimonio presentada ante el oficial del Registro Civil, así como en el acta de dicho matrimonio. Expresó que si bien es verdad que no celebraron capitulaciones matrimoniales por escrito y en la forma establecida por los Capítulos IV y V del Código Civil, también --



de la sociedad conyugal subsiste como lo previe-  
artículo 183 del Código Civil, se regirá en lo --  
que no estuviere expresamente estipulado, por las dispo-  
siciones relativas al contrato de sociedad; que es cier-  
to que demandó anteriormente el divorcio a su cónyuge, -  
y si no probó su acción fue no porque no existieran ele-  
mentos probatorios, sino porque su abogado no atendió--  
debidamente el juicio. Terminó oponiendo la excepción-  
de improcedencia de la vía intentada, "en cuanto se re-  
fiere a la acción de nulidad que se pretende fundar en  
"la falta de formalidad del contrato matrimonial, de-  
"brado bajo el régimen de sociedad conyugal, porque el-  
"caso se encuentra comprendido en el artículo 430 del -  
"Código de Procedimientos Civiles". Añujo que la nuli-  
dad por falta de formalidad es relativa, pero produce -  
efectos jurídicos según los artículos 2227 y 2228 del -  
Código Civil. Aún más cuando consta de manera fehacien-  
te la voluntad de las partes de que el matrimonio se ce-  
lebrara bajo el régimen de sociedad conyugal, como consta  
en la copia certificada de la solicitud de matrimo--  
nio y acta de este exhibida por el demandante. Opuso-  
la excepción de contradicción entre la acción deducida-  
de disolución y liquidación de la sociedad conyugal, que  
constituye una confesión tácita de su existencia y la -  
afirmación del actor en el sentido de que no existe; --  
asimismo opuso la excepción de improcedencia de la ac-  
ción de pérdida de la patria potestad que tiene sobre -  
su hijo, pues la causa en que se funda la solicitud de-  
divorcio, no se encuentra comprendida en el artículo --  
267 del Código Civil, ni aquélla se basa en ninguna de-  
las previstas por el artículo 444 del propio ordenamien-  
to.- En el mismo escrito de contestación, reconvino al  
actor, demandándole el otorgamiento de las capitulacio-



nes matrimoniales; el pago de las pensiones alimenticias que adeuda y el de las que se sigan venciendo, a razón de [REDACTED] mensuales, tal y como el propio Juzgado del conocimiento lo ordenó, por resolución que consta en el expediente relativo al diverso juicio de divorcio que ella promovió contra el ahora actor, por lo que éste le adeuda las mensualidades comprendidas desde el nueve de junio de mil novecientos cincuenta y dos, hasta la fecha en que formula su reconvencción. -- Relató como hechos que contrajo matrimonio con el actor el once de junio de mil novecientos cuarenta y tres, bajo el régimen de sociedad conyugal; que de esta unión -- procrearon un niño hijo de ambos, a quien se le puso el nombre de [REDACTED]; aunque las capitulaciones matrimoniales no constaron por escrito ni ante notario público, -- las mismas existieron y existen, porque ayudó a su esposo en las operaciones propias del negocio de tienda de -- abarrotes que tiene y de cuyos productos se han derivado los demás bienes que constituyen la sociedad conyugal -- que ininterrumpidamente ha venido administrando y tienen un valor superior a [REDACTED] y producen una utilidad de más de [REDACTED], para comprobar lo cual -- solicitó que se librasen oficios al Director del Registro Público de la Propiedad y al Jefe de la Oficina de -- Giros Mercantiles del Departamento del Distrito Federal -- a fin de que informaran, respectivamente del valor con -- que aparece registrada la casa número [REDACTED] de las calles -- [REDACTED] y la categoría y cantidad con que es -- té calificada y manifestada que gira, la tienda ubicada -- en la esquina de las calles [REDACTED] -- [REDACTED]

El Juez dictó sentencia el catorce de febrero de mil novecientos cincuenta y seis, con estos puntos re





os: "PRIMERO.- Se declara disuelto el vínculo matrimonial que existía entre los señores [REDACTED] y [REDACTED] y que contrajeron en acta del registro Civil de once de Junio de mil novecientos cuarenta y tres, constante en el libro número [REDACTED].

[REDACTED].- SEGUNDO.- Se declara disuelta la sociedad conyugal bajo cuyo régimen se casaron el actor y la demandada. En consecuencia, procédase a la inmediata disolución y liquidación de esa sociedad, observándose las normas de solemnidad y publicidad, requeridas por la Ley tomando en consideración los bienes que van a ser objeto de la liquidación. TERCERO.- Se absuelve a la demandada de la pérdida de la patria potestad sobre su menor hijo [REDACTED] ya que ese menor quedará bajo la patria potestad de ambos padres y bajo la guarda de la señora [REDACTED].- CUARTO.- Se condena al señor [REDACTED] a pagar una pensión de [REDACTED] mensuales para la alimentación de su menor hijo, cantidad que lo será entregada a la señora [REDACTED].- QUINTO.- La demandada [REDACTED] probó su excepción de improcedencia de la vía ni su reconvención, de todo lo cual se absuelve al actor. SEXTA.- Los señores [REDACTED] y [REDACTED] recuperan su capacidad legal para contraer nuevas nupcias pero la señora [REDACTED] no podrá volver a casarse sino después de dos años de la fecha de esta sentencia.- SEPTIMO.- Ejecutoriada que sea la presente sentencia, cúmplase con lo que dispone el artículo 291 del Código Civil.- OCTAVA.- Notifíquese personalmente por haber transcurrido más de dos meses sin actuar".

Sus consideraciones fundatorias en resumen fueron así: La parte actora demostró la celebración del matrimonio, con la demandada señora [REDACTED], quien a su vez, anteriormente le había demandado el divorcio y en cuyo juicio se dictó sentencia absolutoria que confirmó en apelación la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia causando ejecutoria y por tanto acreditó plenamente aquélla, la acción de divorcio que fundó en el artículo 268 del Código Civil. No procede decretar la pérdida de la patria potestad de la madre sobre el menor hijo del matrimonio, que deberá seguir bajo su guarda y custodia, porque la actora no rindió prueba eficaz que ameritara condena al respecto. Como su padre [REDACTED] tiene la obligación de proporcionar alimentos a su menor hijo, que seguirá con su madre, se fija una pensión mensual de [REDACTED]. No puede declararse la inexistencia de la sociedad conyugal, porque no es exacto que ocurra, por falta de alguno de los requisitos fundamentales para que tuviera vida, como serían la falta de voluntad y la falta de objeto, pues de manera expresa, las partes convinieron en celebrar su matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal, como aparece del acta de matrimonio. En lo que toca a su disolución sí es procedente, pues la ley previene que al disolverse el matrimonio, ejecutoriado el divorcio, deberá hacerse la división de los bienes comunes, tal como se previene en el artículo 287, observándose las normas y formalidades a que se refieren los artículos 183 y 2680 al 2735, que señalan las reglas que han de seguirse en forma supletoria cuando las partes no convinieron de manera expresa; también se observarán los requisitos de solemnidad o sea de otorgamiento de escritura ante Notario por exceder el-



- 7 -

5360/56  
(35)

Forma A. Núm. 55

los bienes de [REDACTED], con su correspondiente inscripción en el Registro Público de la Propiedad, "y según los datos que en ejecución de sentencia proporcionen las partes". Con referencia a la reconvencción para que sean otorgadas las capitulaciones matrimoniales, la contrademanda es inoperante, porque al demandarse la disolución de la sociedad conyugal y decretarse ésta, carece de objeto el otorgamiento de dichas capitulaciones y dado que ya se estableció la forma en que se procederá a la liquidación.

Segundo:- Inconforme el actor con esa sentencia, la recurrió en apelación y substanciada el recurso, la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito y Territorios Federales, promulgó resolución el veinticuatro de agosto de mil novecientos cincuenta y seis, confirmándola y condenando al apelante al pago de las costas causadas en ambas instancias. Esta es la sentencia que ahora constituye el acto reclamado.

Tercero:- La demanda de amparo, presentada en tiempo, fue admitida el cinco de marzo de mil novecientos cincuenta y siete; la autoridad responsable rindió su informe justificado. El Ministerio Público pidió que el amparo se niegue. El quejoso solicitó previamente copia certificada de la sentencia reclamada. El expediente se turnó al relator el dos de julio del mismo año. Hubo promociones y actuaciones; la última es de fecha ocho de octubre del año mencionado; y,

#### CONSIDERANDO:

PRIMERO:- La existencia del acto reclamado quedó comprobada con el informe justificado de la autoridad responsable y la copia certificada de constancias ofrecida por el quejoso.

SEGUNDO:- El agraviado expresa en la demanda,



como conceptos de violación e invoca como disposiciones legales violadas, los siguientes:

1o.- La responsable clude tratar el punto - - planteado en el primer agravio de la apelación, relativo a la inexistencia del contrato de sociedad conyugal, por la falta de consentimiento sobre sus elementos esenciales. Tales elementos son: a) Que los pretensos socios - se comprometan a poner ciertos bienes en común, los que pueden ser dinero, muebles, inmuebles, su industria personal o su crédito, y b) Que los asociados se propongan un resultado lícito y común, el que no siempre es un beneficio propiamente dicho. El acuerdo sobre estos puntos constituye el ánimo contrahendae societatis. La conyugal es una subespecie de la figura de contrato denominado sociedad, que no escapa a las reglas aplicables a toda suerte de convenciones, cualesquiera sea su naturaleza, pues se constituye cuando los socios se comprometen a poner determinadas o determinables cosas en común, para obtener una utilidad apreciable en dinero, por lo que, para que la sociedad conyugal exista, no basta que los contrayentes manifiesten que adoptan este régimen, - al celebrar el matrimonio. El necesario consentimiento sobre los elementos esenciales de este contrato, se consigna en las estipulaciones denominadas capitulaciones matrimoniales, que si no se otorgan, no existe el contrato, ya que no llega a precisarse qué bienes habrán de salir del patrimonio individual para constituir el haber social; además, en el caso, tampoco se formó el consentimiento, sobre la manera de distribuirse las utilidades.- La demandada confesó al contestar la demanda, que no se celebraron capitulaciones, con lo que el actor probó su afirmación de que las mismas no existen.- En el primer agravio el actor y apelante expresó que la sentencia de-



grado, viola en su perjuicio, por aplicación inde-  
bida, el artículo 1794 fracción I del Código Civil, y --  
por falta de aplicación, el artículo 2224 del mismo cuer-  
po legal, expresando que el consentimiento en la figura-  
de contrato denominada sociedad, se forma cuando los aso-  
ciados establecen sus obligaciones y sus derechos reci-  
procos, esto es, cuando concretan sus obligaciones, que-  
pueden consistir en aportar sus recursos o sus esfuerzos  
para la realización de un fin común, siendo también indis-  
pensable que se estipule la forma como se repartirán las  
ganancias y las pérdidas, por lo que no habiendo constan-  
taciones matrimoniales que consignen con precisión las -  
obligaciones de los cónyuges y sus derechos, el consenti-  
miento no llega a existir.- Si la inexistencia de la so-  
ciedad conyugal es evidente por la falta de consentimien-  
to, más clara es aún por la ausencia de objeto. En el--  
contrato de sociedad, el objeto son los bienes o los ser-  
vicios que cada uno de los cónyuges aporta al patrimonio  
social. Y si al contraer matrimonio, no se precisó qué-  
bienes salían de la propiedad individual de los consor--  
tes, para constituir el activo de la sociedad, la misma  
es inexistente por falta de objeto. En consecuencia, la  
aplicación indebida del artículo 1794 del Código Civil,-  
conduce a la falta de aplicación del artículo 2224 del -  
propio ordenamiento, porque la falta de consentimiento--  
y de objeto del contrato de sociedad conyugal, obligaba-  
a la responsable a negarle a ésta todo efecto jurídico,-  
pues la simple declaración de casarse bajo el régimen de  
sociedad conyugal, no es un contrato, ya que por tal de-  
claración, el consentimiento no se formó, ni se creó el-  
objeto de la convención.- Al abstenerse la responsable-  
de rebatir las anteriores argumentaciones, desestimándo-  
las viola el artículo 81 procesal aplicable, pues se ne-

gó a resolver sobre las acciones y pretensiones deducidas en la instancia. También violó el artículo 406 -- de la ley adjetiva, al desestimar la confesión de la demandada sobre la falta de celebración de capitulaciones matrimoniales.

2o.- La responsable atribuyó al apolante, -- una argumentación que nunca hizo valer, como es la relativa a que la mujer era menor de edad al contraer matrimonio, para demostrar después la falsedad de ese argumento, diciendo que a la celebración de tal matrimonio, concurren los padres de la menor, ratificando su consentimiento.- También atribuye al ahora quejoso, el argumento de que la sociedad conyugal es inexistente, porque no se celebraron en forma escrita y por separado, las capitulaciones matrimoniales que iban a reglamentarla, a fin de poder decir a continuación, que esta circunstancia no hace inexistente la sociedad, -- porque la ley contiene disposiciones minuciosas para suplir tal omisión. Ahora bien, no es cierto que el actor hubiese afirmado que la sociedad conyugal es inexistente, porque no se celebraron capitulaciones matrimoniales por escrito, pues lo que afirmó fue que -- las mismas, no se celebraron ni por escrito ni verbalmente, ni en forma alguna, y la demandada no ofreció prueba para acreditar que tales capitulaciones se celebraron, aunque fuere en forma verbal, confesando en -- cambio en su contestación que nunca las celebró. La responsable al citar como fundamento de su fallo, el artículo 1796 del Código Civil, olvidó que no le probaron la existencia del consentimiento en el contrato de sociedad, fingiendo ignorar también, que por confesión expresa de la demandada, ese consentimiento no existió. Cita la Sala sentenciadora el artículo 1797 del cuerpo-





de referencia, que dispone que la validez y el cumplimiento de los contratos, no puede dejarse al arbitrio de alguna de las partes, pero los convenios que no reúnan los requisitos de consentimiento y objeto, que puedan ser materia del contrato, no existen, por tanto, las disposiciones invocadas por la responsable son aplicables, no para fundar la sentencia de primera instancia, como pretende, sino para revocarla.

3o.- La responsable dice que las relaciones entre los cónyuges deben regirse, en lo tocante a la propiedad, administración, reparto, de los bienes habidos, por las disposiciones del contrato de sociedad, contenidas en el Código Civil, según el artículo 183, pero este precepto sólo es aplicable a las sociedades conyugales que hubiesen sido omisas en cualesquiera circunstancias secundarias, y no lo es al caso en que los cónyuges hayan omitido dar su consentimiento, sobre los elementos esenciales del contrato.

4o.- El segundo agravio expresado ante la responsable se hizo consistir en la aplicación indebida del artículo 287 del Código Civil, el cual dispone que "Ejecutoriado el divorcio, se procederá desde luego a la división de los bienes comunes", pues el inferior determinó que sí es procedente la disolución de la sociedad conyugal, en los términos del precepto citado. La responsable desestimó el agravio, diciendo que la violación respectiva no infliere perjuicio, siendo que como la demandada confesó que no se celebraron capitulaciones matrimoniales, los bienes propiedad de cada uno de los cónyuges, no salieron de su patrimonio individual, para ingresar al haber de la supuesta sociedad conyugal y si el inferior, maliciosamente ordenó en su sentencia, el otorgamiento de escrituras públicas por lo que respecta a bie-

nes inmuebles, cuyo valor exceda de [REDACTED] con ello resolvió favorablemente la pretensión sustentada en la reconvención de [REDACTED], respecto de que se librarán oficios al Director del Registro Público de la Propiedad y al Jefe de Oficina de Giros Mercantiles del Departamento del Distrito Federal, a efecto de que informaran con qué valor aparece registrada la casa número [REDACTED] y en qué categoría está clasificada y qué cantidad se manifiesta gira, la tienda ubicada en la esquina de [REDACTED]. Los oficios nunca se llegaron a girar, ni se probó -- que los bienes a que alude la demandada fuesen propiedad de la sociedad conyugal o, al menos, de ambos cónyuges, y así, es claro que tales bienes son de la exclusiva propiedad del actor pues la carga de la prueba correspondía a la parte reo, por ser una obligación constitutiva de su acción reconvencional. No -- obstante, el Juez de Primera Instancia ordenó inclusive, el otorgamiento de escrituras públicas e inscripción en el Registro Público de la Propiedad, respecto de tales bienes. El considerando respectivo, de causar estado, producirá en perjuicio del demandante hoy quejoso, los efectos de la cosa juzgada, para el caso de que posteriormente pretenda excluir de la supuesta liquidación de la sociedad conyugal, los bienes que -- le pertenecen exclusivamente, por lo que para evitarse efecto jurídico, hizo valer el agravio desechado -- por la responsable con el pretexto de que la violación respectiva no le causa perjuicio. Esa autoridad dice que "...si ni el esposo ni la esposa aportaron bienes algunos al fondo común de la sociedad conyugal y no hay por lo mismo, bienes que dividir, el-



agravio resulta enteramente aparente, pues ningún -  
perjuicio se les causará a ninguno de los cónyuges,  
"si ningunos bienes han aportado", con lo que se fin-  
ge ignorar la parte de la sentencia de primer grado -  
que da por buena, la pretensión de la demandada, pa-  
ra que se otorguen escrituras públicas y se hagan --  
las anotaciones en el Registro Público de la Propie-  
dad, en relación a la casa de la exclusiva propiedad  
del actor, marcada con el número [REDACTED] -

[REDACTED] de esta ciudad. La  
responsable debió haber reconocido que, como n[un]ca -  
celebraron capitulaciones matrimoniales, faltó la de-  
terminación de bienes que dejaron de ser propiedad -  
individual de los cónyuges para pasar al patrimonio-  
social, y en consecuencia, que el mandato del Juez, -  
ordenando la liquidación de la sociedad conyugal, era  
improcedente.

5o.- El artículo 183 del Código Civil otor-  
ga a las capitulaciones matrimoniales el carácter de  
constitutivas de la sociedad conyugal, por lo que só-  
lo en el caso de que las mismas sean incompletas, se  
podrán suplir sus lagunas con los preceptos relati-  
vos a las sociedades civiles, pues la citada disposi-  
ción no dispone ni prevé que las capitulaciones fal-  
ten, como ocurre en la especie. El agravio en que -  
se expresó la anterior argumentación, fue desestima-  
do por la responsable alegando que las consideracio-  
nes respectivas no surten ningún perjuicio al apelan-  
te.

6o.- También se aplicaron inexactamente -  
los artículos 2688 a 2735 del Código Civil, pues el  
inferior expresa que deben observarse las normas con-  
tenidas en estos preceptos y el citado artículo 183,



en cuanto establecen las formas que deben aplicarse para la disolución de la sociedad en forma supletoria, o cuando las partes no convinieren otra cosa de manera expresa. Ahora bien, esos artículos sólo serían aplicables a una sociedad existente, en el caso de un contrato incompleto, pero no lo son ante un ejemplo evidente de inexistencia de la sociedad, pues resulta imposible liquidar lo que no tuvo capital líquido o liquidable. La responsable desestimó el agravio respectivo diciendo que es reproducción de los anteriores, porque en él se insiste en la inexistencia de la sociedad conyugal, a pesar de ser mencionada ésta en el acta de matrimonio, lo cual es antijurídico, porque una cosa es suplir la deficiencia del consentimiento y otra, muy distinta, pretender crearlo de la nada aplicando los referidos artículos del Código Civil.

7o.- En su reconvención, la demandada pidió que se girasen oficios para determinar el valor de la tienda propiedad del actor, pero en la contestación a la demanda no se sustenta la misma pretensión. El Juez dio entrada a la reconvención no obstante que fue intentada en vía distinta de la acción principal, lo que dio lugar a que el demandante apelara del acuerdo respectivo. Dándose cuenta del disparate cometido, el Juez se abstuvo de tramitar la reconvención, de modo que la litis quedó formada exclusivamente con las pretensiones del actor deducidas en la demanda y las esgrimidas en la contestación. Por tanto, cuando resuelve en su sentencia que en la disolución y liquidación de la sociedad conyugal, se observarán los requisitos de solemnidad o sea otorgamiento de escritura pública ante notario, por exceder el valor de los bienes de [REDACTED] y su correspondiente inscripción en el Registro Público -



la Propiedad, viola el artículo 81 procesal aplicable porque su fallo es incongruente con las acciones excepciones deducidas oportunamente en el juicio, -- pues no se ve de dónde saca que hay bienes comunes cuya traslación de dominio implique requisitos de solemnidad, y tampoco se ve de donde sacó que esos bienes -- valían más de [REDACTED] si ni siquiera se le -- mencionaron en autos.- El agravio respectivo corrió -- la misma suerte que los anteriores, pues la responsable dice que como la demandada confesó que ningún -- bien adquirió el carácter de común, el agravio es teórico y debe desecharse.- Ahora bien, si en la contestación de la demanda no le pidieron al inferior que -- mandase dividir la casa propiedad del actor, ni el comercio que también le pertenece, bienes inmuebles a -- los que evidentemente se refiere la sentencia, su -- fallo y el de la responsable que lo confirmó, son gratuitos y violatorios del artículo 81 del Código Procesal.

8o.- La responsable declara improcedente el -- sexto agravio alegado en la apelación, falseando los hechos y atribuyendo a la Suprema Corte una jurisprudencia que no existe, según la cual cuando el divorcio se pide porque el otro cónyuge previamente intentó una demanda de divorcio, en la que no llegó a demostrar la causa que invocó, o resultó insuficiente la prueba rendida, en ese caso no rige el artículo 283 del Código Civil. Pero lo que la Suprema Corte ha resuelto es -- exactamente lo contrario de lo anterior, en las tesis publicadas en las páginas 368 del tomo IV, 1506 del tomo LIV, 934 del tomo LIX, 1566 del tomo LVI, 849 del tomo LVII, 2554 del tomo LII y 2489 del tomo LIX del Semanario Judicial de la Federación. En consecuencia,

la responsable debió revocar la sentencia de primera -- instancia, porque el Juez no le negó a la demandada, la pérdida de la patria potestad sobre su menor hijo, a pesar de que la misma había perdido el juicio de divorcio que previamente instauró en contra del ahora actor.- Re produce el quejoso el sexto agravio formulado ante la responsable y sostiene que es la mejor demostración de que, de acuerdo con el principio analógico ubi eadem -- legis ratio, ibi eadem legis dispositio, y al tenor del artículo 19 del Código Civil, se debió revocar la sentencia apelada, declarando perdida la patria potestad -- para la parte reo, sobre su menor hijo.

9o.- La responsable dice que el Juez estuvo en lo justo al no decretar la pérdida de la patria potestad de la madre y que, no combatiéndose en la expresión de agravios las consideraciones que tuvo en cuenta el inferior para confiar a la demandada, la guarda del menor [REDACTED], la sentencia apelada es -- congruente al fijar una pensión de [REDACTED] mensuales a cargo del marido.- Es un razonamiento deleznable decir que, por ser justo que la demandada no pierda la patria potestad, se debe condenar al actor al pago de una pensión alimenticia, pues ya se ha demostrado que [REDACTED] no debe ejercitar la patria potestad sobre su menor hijo, ya que quien ejercita una acción de divorcio en contra del padre de sus propios -- hijos, ha atacado la esencia misma de los principios -- que debe inculcar a éstos. Además, es falso que el actor no hubiese combatido las consideraciones del Juez -- para confiar a la esposa la guarda del menor, toda vez que en el agravio correspondiente dijo que, "quien da -- "motivo a una controversia tan grave en el seno del hogar, como es un juicio de divorcio, y es declarado cón





El conyuge culpable, debe privársele de la patria potestad de la ley otorga a los padres sobre los hijos". El anterior del Juez fue el de premiar al conyuge culpable, confirmándole el ejercicio de la patria potestad sobre el menor [REDACTED]. Así, es impropio la premisa en que se apoya la Sala sentenciadora, para confirmar la condena a una pensión de [REDACTED] mensuales. Dice esta autoridad que no es de aplicarse en la especie el artículo 309 del Código Civil, porque el actor no tiene en el caso derecho a incorporar a su hijo al seno del hogar, ya que este derecho le corresponde exclusivamente a la parte demandada (conyuge culpable), lo que demuestra evidentemente la injusticia del fallo reclamado. El precepto de referencia establece dos hipótesis para el obligado a dar alimentos: asignar una pensión competente al acreedor alimentario, o incorporarlo a su familia. Por tanto, no puede negarse al actor el derecho de escoger la forma en que debe cumplir con su obligación, puesto que debe declararse la pérdida de la patria potestad para la demandada, y el hoy quejoso está en posibilidad de cumplir con esa obligación, incorporando a su menor hijo al seno de su hogar.

Lo.- Como la responsable debió fallar en sentido opuesto de como lo hizo, no es el caso de aplicar la fracción IV del artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles, resultando injusta la condena en costas de ambas instancias dictada en contra del agraviado.

TERCERO.- La autoridad responsable fundó la sentencia reclamada, respecto de las cuestiones que plantea el agraviado en sus anteriores conceptos de violación, sosteniendo en resumen que, probada la-

acción de divorcio, deducida por el marido, con apoyo en lo que dispone el artículo 268 del Código Civil, - la situación del hijo menor de edad en cuanto a la -- pérdida de la patria potestad de la madre, no puede -- regirse por lo que se previene en el artículo 283 - - acerca del cónyuge que haya sido declarado culpable, - en el juicio de divorcio, porque cuando la disolución del matrimonio se pide con base en que el cónyuge de-- mandado, anteriormente intentó una demanda de divor-- cio y no logró demostrarla, no tiene aplicación dicho artículo 283 que sólo abarca los casos comprendidos - en las causales que enumera el artículo 267 y la cau-- sal del artículo 268, tal como lo ha resuelto la Su-- prema Corte de Justicia en varias ejecutorias. No -- combatiéndose en los agravios, las consideraciones -- del Juez para confiar a la esposa la guarda del me-- nor [REDACTED], hijo de ambos, fueron congruentes sus ra-- zones para fijarle una pensión alimenticia y si ésta-- se considera excesiva, dadas las posibilidades econó-- micas del padre, tiene a salvo sus derechos para oxi-- gir su reducción. Aunque el obligado a pagar la pen-- sión alimenticia tenga derecho a incorporar a su fami-- lia al acreedor alimentario, en el caso no puede ha-- cer uso de él, porque entonces privaría a la cónyuge-- de un derecho que le fue concedido, el de la tenencia-- y custodia del menor. Del acta de matrimonio, que el mismo actor presentó con su demanda, en la que pidió-- que se decretara la disolución de la sociedad conyu-- gal, se desprende que los esposos optaron por el régi-- men de sociedad conyugal y aun cuando en esa época -- era menor de edad la esposa, sus padres concurren-- ratificando su consentimiento, para dicho matrimonio, contraído con ese régimen de bienes. Bajo el imperio



la legislación actual, no puede haber matrimonio --  
que no esté sujeto a algún régimen en lo tocante a --  
-bienes, por lo que apareciendo que se celebró bajo el  
de sociedad conyugal, ésta debe disolverse y liquidar--  
se los bienes que correspondan al fondo común, confor--  
me a las disposiciones que norman tal régimen. Tam--  
bién, como según la ley, no puede celebrarse matrimo--  
nio alguno sin que los cónyuges manifiesten expresa--  
mente si optan por el régimen de separación de bie--  
nes o por el de sociedad conyugal, constando en el ca--  
so que escogieron este último, no puede reputarse --  
inexistente sólo porque no hayan celebrado por escri--  
to y por separado las capitulaciones matrimoniales, --  
pues la ley contiene disposiciones para suplir la omi--  
sión, en los artículos 1794, 1796, 1797 y demás rela--  
tivos del Código Civil; y todavía más, cuando estas --  
disposiciones no son suficientes, las relaciones en--  
tre los cónyuges en lo tocante a la propiedad, admi--  
nistración, reparo, etc., de los bienes habidos, de--  
ben regirse por las disposiciones del contrato de so--  
ciedad, que contiene el mismo Código Civil. Si los --  
cónyuges, en el caso, no aportaron bienes a la socie--  
dad conyugal y si ninguno han adquirido después, que--  
sea común, la sentencia apelada no irroga agravio, --  
pues no menciona en concreto bien alguno, y reserva --  
para la ejecución de la misma, la determinación de --  
los que deban ser considerados como propios de cada --  
cónyuge y cuáles como comunes, según los datos que --  
proporcionen las partes, como puede verse de la parte  
final de su considerando segundo, que rige directamen--  
te la parte resolutive. Así, al considerar improce--  
dentes los gravios expresados por el apelante, la --  
responsable resolvió confirmar en todas sus partes la



sentencia apelada.

CUARTO:- Los conceptos de violación primero a sexto son infundados, por las siguientes razones jurídicas.- De autos aparece que el actor y ahora quejoso demandó el divorcio por la causa que señala el artículo 268 del Código Civil, la pérdida de la patria potestad de la demandada sobre su hijo [REDACTED] y la disolución y liquidación de la sociedad conyugal. En el acta de matrimonio consta que comparecieron ante el Oficial del Registro Civil, [REDACTED] y [REDACTED] para contraer matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal, de acuerdo con la solicitud y documentos que presentaron. Así aparece de la copia certificada que presentó el actor con su demanda y que, tanto por esta circunstancia como por ser públicos, prueban en su contra, sin que puedan perjudicarse en cuanto a su validez, por lo alegado desconociendo la celebración y presentación del convenio sobre bienes de la sociedad conyugal.

✓ Puede verse en la exposición de motivos, de la comisión redactora del anteproyecto del Código Civil en vigor que: "Se obligó a que al contraerse matrimonio - "forzosamente pactaran los cónyuges acerca de si estarían comunidad o separación de bienes, procurándose "por este medio garantizar debidamente los intereses de "la esposa en el momento más propicio, cuando el hombre "desea hacerla compañera de su vida. De esta manera se "combaten prejuicios muy arraigados que impiden, por -- "falsa vergüenza, o mal entendida dignidad, tratar de -- "asuntos pecuniarios cuando se funda una familia, que -- "imperiosamente exige muchos y continuados gastos". Y después de conocer otros puntos de vista y tomar en cuenta observaciones, la propia Comisión reiteró: "Se obli



538

que al contraerse matrimonio, los cónyugos pacta-  
expresamente acerca de si establecían comunidad o  
separación de bienes. El Código de 1884 establecía que  
"cuando los esposos no celebraran ningún convenio sobre-  
"sus bienes, por disposición de la ley quedaba estable-  
"cida la sociedad legal. En la Ley de Relaciones Fami-  
"liares se adoptó el sistema de separación de bienes, -  
"cuando los esposos nada pactaban sobre ellos. En el "  
"Proyecto del nuevo Código se ordena que los que preten-  
"den contraer matrimonio, pacten expresamente la comuni-  
dad o la separación de bienes. Nada debe presumirse -  
"en esta materia; los cónyugos arreglarán lo relativo -  
"a sus bienes por convenios expresos. La mujer no sal-  
"drá perjudicada en este sistema, como algunos preten-  
"den, porque para celebrar el convenio se elige el mo-  
"mento que le es más propicio, cuando el hombre desea -  
"hacerla compañera de su vida y con el sistema que se -  
"pretende implantar, se combaten prejuicios muy arraiga-  
"dos que impiden por falsa vergüenza o mal entendida --  
"dignidad, se trate de asuntos pecuniarios cuando se va  
"a fundar una familia, que imperiosamente exige muchos-  
"y continuados gastos. Además es una medida altamente-  
"educadora de la mujer, obligarla a que al contraer ma-  
"trimonio, cuide de sus intereses presentes y futuros -  
"y a que no abandone enteramente su destino, en manos -  
"del que va a ser su marido".

De esto se sigue, que el legislador fundamen-  
talmente se propuso que pactada la comunidad de bienes,  
no pudiera dejar de producir sus efectos. Así, demost-  
ra la existencia del contrato de matrimonio, celebrado-  
con el régimen de sociedad conyugal, debe establecerse-  
que obliga a los contratantes, no sólo al cumplimiento-  
de lo expresamente pactado, sino también a las conse-

son  
cuencias, que según su naturaleza/conformes a la buena-  
fe, al uso o a la ley. Por tanto, la falta de capitula-  
ciones matrimoniales, no puede originar que no se cum-  
pla la voluntad de las partes, ni se produzcan los efec-  
tos de la comunidad de bienes querida, ni tampoco puede  
determinar que se considere el matrimonio, como regido-  
por la separación de bienes, contraria al consentimien-  
to de los cónyuges. La sociedad conyugal, si bien tie-  
ne semejanzas con el contrato de sociedad, no es idénti-  
ca a él, puesto que ésta tiene personalidad jurídica --  
propia, distinta de la de los socios, y persigue fines-  
económicos, en cambio, aquélla, según su naturaleza, no  
es sino una verdadera comunidad, de mera conservación y  
aprovechamiento mutuo; una propia comunidad de intere-  
ses, que responde adecuadamente a los cónyuges, que --  
unen sus personas y sus intereses. Esta comunidad, por  
principios de equidad y justicia, consecuentes con la --  
situación de mutua colaboración y esfuerzos que vincula  
a los cónyuges, le da derecho igual sobre los bienes, de  
manera que como partícipes tanto en los beneficios como  
en las cargas, sus partes serán por mitad y serán las --  
disposiciones legales sobre copropiedad, las aplicables  
para resolver las cuestiones que surjan sobre el parti-  
cular. Esto, claro es, siempre que no existan capitula-  
ciones matrimoniales, pues de haberse celebrado, a --  
ellas debe estarso y en sus omisiones, a lo que ante --  
tal circunstancia, dispone el artículo 183 del Código --  
Civil. Finalmente, en lo que concierne a la sociedad --  
conyugal, lo que usualmente se pacta, es que comprende-  
rá los bienes muebles e inmuebles, y sus productos, que  
los consortes adquirieran durante su vida matrimonial, in-  
cluyendo el producto de su trabajo y los frutos de los-  
bienes privativos o peculiaros de cada uno, ya adquiri-





El celebrarse el matrimonio y ante la falta de capitaciones, así debe interpretarse que lo desearon, por ser ésto además, lo más lógico y conforme a su voluntad-manifestada en el pacto obligatorio de su matrimonio, -- con sociedad conyugal.

Con iguales consideraciones a las antes expresadas se pronunció ejecutoria en el directo 2031/57, [REDACTED] fallado el catorce de febrero de mil novecientos cincuenta y ocho, por mayoría de tres votos de los señores Ministros Mariano Ramírez Vázquez, Gabriel García Rojas y Presidente Alfonso Guzmán Neyra.

Lo expuesto conduce a considerar que la responsable falló con arreglo a lo que disponen los artículos 1794, 1796 y 1797 del Código Civil, pero además su fallo responde a una correcta interpretación jurídica de los artículos 178, 179, 183, 189, 194, 261, 287 y 942 -- del mismo ordenamiento, y correctamente resolvió que se disolviera la sociedad conyugal y al quedar ejecutoriado el divorcio se liquide, procediéndose a la división de los bienes comunes, según las formalidades que atenta la naturaleza de estos señala la ley y según los elementos que proporcionen las partes en el procedimiento de ejecución de la sentencia reclamada. ✓

En consecuencia, no se encuentran acreditadas las infracciones a las leyes ordinarias que se citan, ni las violaciones a los artículos 14 y 16 Constitucionales, y debe negarse la protección de la justicia federal.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en lo que disponen los artículos 103-I, 107-I, II, III y V de la Constitución Política, 45, 78, 158, 167, 179, -- 186 y 190 de la Ley Orgánica de los artículos 103 y 107 de la propia Constitución y 26-III de la Ley Orgánica -- del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

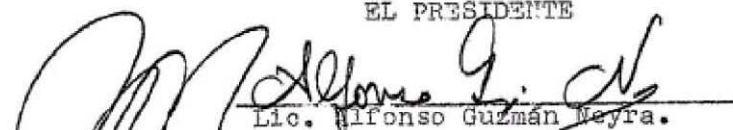
UNICO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a [REDACTED], contra los actos que reclama de la Tercera Sala del Tribunal Superior de -- Justicia del Distrito y Territorios Federales y del -- Juzgado Séptimo de lo Civil en esta Capital, que hizo consistir en la sentencia definitiva pronunciada el -- veinticuatro de agosto de mil novecientos cincuenta y seis, en el toca a la apelación del juicio ordinario - civil seguido por el quejoso en contra de [REDACTED] y en su ejecución.

Notifíquese, publíquese, remítase testimonio de esta resolución a la autoridad responsable y, en su oportunidad, archívese el expediente.

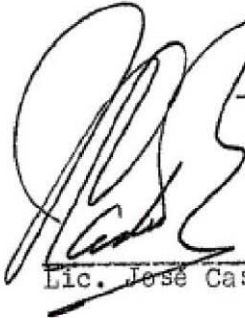
Así, lo resolvió la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de tres votos de los señores Ministros Ramírez Vázquez, García Rojas y Guzmán Neyra, contra el voto del señor Ministro Castro Estrada, quien lo emitió por la concesión del amparo para efectos, conforme a los términos del voto particular que formulará. Fue relator el señor Ministro Ramírez Vázquez. El C. Ministro Santos Guajardo no asistió a la sesión por las razones que constan en el acta del día.

Firman los CC. Presidente y Ministros que integraron la Sala con el Secretario de Acuerdos de la misma que autoriza y da fe. E.L. (son) vale.-

EL PRESIDENTE

  
Lic. Alfonso Guzmán Neyra.

LOS MINISTROS:

  
Lic. José Castro Estrada.

  
Lic. Mariano Ramírez Vázquez.

- 25 -

5360/56  
(35)

240



*[Signature]*  
Lic. Gabriel García Rojas.

*[Signature]*  
SRIO. DE INT.  
Y CUENTA

EL SRIO. DE ACUERDOS DE LA SALA.

*[Signature]*  
Lic. Abelardo Cárdenas MacGregor.

8 MAY 1958

Por lista de la misma fecha, se  
notificó la resolución anterior a los interesados  
y al Ministerio Público Federal.

*[Signature]*  
SENT







VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL C. MINISTRO LICENCIADO  
JOSE CASTRO ESTRADA RESPECTO DE LA EJECUTORIA PRONUN-  
CIADA EN EL AMPARO DIRECTO 1960/56/2a. PROMOVIDO POR-

Disiento de la opinión mayoritaria y conce-  
do el amparo solicitado, apoyado en las siguientes --  
consideraciones:

El código civil de 1870, y el de 1884, distin-  
guieron entre el régimen de separación de bienes y el  
de la sociedad conyugal; y dentro de esta última, dis-  
tinguieron la sociedad voluntaria de la sociedad legal,  
al reglamentar el contrato de matrimonio con relación -  
a los bienes de los consortes ( artículos 2131 a 2204 -  
y 1997 a 2022 -Sociedad Legal- y 1986 a 1996 y 2120 a  
2130 y 1986 a 1996 - Sociedad Voluntaria- de los códi-  
gos de 70 y 84).

La Ley de Relaciones Familiares proscribió -  
el régimen de la sociedad conyugal en su doble manifes-  
tación y sólo autorizó y reguló la separación de bie-  
nes entre los cónyuges.

El código de mil novecientos veintiocho, vi-  
gente desde mil novecientos treinta y dos en el Distri-  
to Federal, ~~conservó~~ <sup>reservó</sup> el régimen de separación de bie-  
nes pero permitió también el de la sociedad conyugal, -  
identificando a ésta con la antigua sociedad volunta-  
ria de los códigos de setenta y de ochenta y cuatro --  
(artículos 183 a 206). De los párrafos de la exposición  
de motivos de este último ordenamiento que se insertan  
en la ejecutoria del que este voto particular forma --  
parte, resulta evidente la voluntad expresa del legis-  
lador en el sentido de que sólo hay sociedad conyugal  
cuando los consortes voluntariamente celebran el con-  
trato con las capitulaciones matrimoniales correspon--

dientes. De lo contrario, la llamada sociedad conyugal no existe.

Así es como el artículo 98 del código civil en vigor dispone que, al escrito que las personas que pretendan contraer matrimonio presenten al Oficial -- del Registro Civil, acompañarán el convenio que deberán celebrar con relación a sus bienes presentes y a los que adquirieran durante el matrimonio, en el cual -- expresarán con toda claridad si el matrimonio se contrae bajo el régimen de sociedad legal o bajo el de -- separación de bienes. No puede dejarse de presentar -- este convenio, ni aun a pretexto de que los pretendientes carecen de bienes, pues en tal caso, versará sobre los que adquirieran durante el matrimonio. Y el Oficial del Registro Civil deberá tener especial cuidado sobre este punto, explicando a los interesados todo -- lo que necesiten saber, a efecto de que el convenio -- quede debidamente formulado. Conforme al artículo 99, en los casos en que los pretendientes por falta de conocimientos, no puedan redactar dicho convenio, el -- propio Oficial tendrá obligación de redactarlo con -- los datos que los mismos pretendientes le suministren. A la necesidad de cumplir con estas disposiciones de -- interés público, que no admite sean renunciadas, ni -- tampoco inobservadas por la voluntad de los particulares, obedece que los Oficiales del Registro Civil como es bien sabido, tengan impresos ejemplares del convenio a que se contrae la fracción V del artículo 98 del Código Civil, a disposición de los contrayentes de matrimonio bajo sociedad conyugal, en los que es usual -- pactar que atañe a bienes futuros, por no tenerlos presentes, y que comprenderá todos los bienes muebles e --





inmuebles y sus productos que los consortes adquirieran durante su vida matrimonial, incluyendo el producto de su trabajo, y que cada consorte tendrá en ellos la participación del cincuenta por ciento, así como que la sociedad conyugal se liquidará conforme a las bases que establece el mismo Código Civil.

Además, el artículo 178 del código civil del Distrito Federal establece que el matrimonio debe celebrarse bajo el régimen de sociedad conyugal o bajo el de separación de bienes, y el ~~179~~ define las capitulaciones matrimoniales como los pactos que los esposos celebran para constituir la sociedad conyugal o la separación de bienes y reglamentar la administración de éstos en uno y otro caso. Por otra parte, el artículo 183 del mismo código establece que la sociedad conyugal se regirá por las capitulaciones matrimoniales que la constituyan, y en lo que no estuviere expresamente estipulado, por las disposiciones relativas al contrato de sociedad.

De conformidad con estos preceptos puede afirmarse que para que la sociedad conyugal tenga existencia se requiere la celebración de capitulaciones que la constituyan. No basta, en consecuencia, para ese efecto, la simple manifestación de los cónyuges en el sentido de que el matrimonio se contrae bajo el régimen de sociedad conyugal.

Esta conclusión encuentra apoyo además en las siguientes consideraciones: de acuerdo con lo que establece el artículo 189 del código civil, las capitulaciones matrimoniales en que se establezca la sociedad conyugal debe contener, entre otros requisitos, la lista de los inmuebles y muebles que cada consorte

lleve a la sociedad, la declaración expresa de si la sociedad ha de comprender todos los bienes de cada con-  
sorte o sólo parte de ellos precisando en este último  
caso cuáles son los bienes que hayan de entrar a la --  
sociedad, la declaración de si los bienes futuros que  
adquirieren los cónyuges durante el matrimonio pertene-  
cen exclusivamente al adquirente o si deben repartirse  
entre ellos y en qué proporción. Lo dispuesto en este  
precepto, que exige el pacto expreso respecto de cuá-  
les son los bienes que deben formar parte de la socie-  
dad, en concordancia con los preceptos anteriormente --  
examinados, y en vista de que el código vigente no res-  
tableció la sociedad legal, conduce a concluir que de  
acuerdo con dicho ordenamiento la sociedad conyugal de-  
be ser contractual, y sólo se constituye por medio de  
capitulaciones convencionales.

Esta conclusión justifica lo argumentado por  
la responsable en cuanto a que la segunda parte del --  
citado artículo 183, sólo tiene aplicación cuando ha-  
biendo capitulaciones, éstas son omisas en algunos pun-  
tos, pero no cuando no existen capitulaciones puesto --  
que en este caso no puede tenerse por constituida la --  
sociedad. Esto se comprueba con el antecedente del ci-  
tado precepto, que lo es el artículo 2130 del código --  
de setenta, relativo a la sociedad voluntaria.

Conforme a lo anteriormente expuesto conclu-  
yo que la responsable no estuvo en lo justo al consi-  
derar que en la especie existió la sociedad conyugal --  
a pesar de que no hubo capitulaciones matrimoniales, --  
haciendo una inexacta aplicación de las disposiciones  
legales que invocó en la resolución reclamada y dejan-



5.

Forma A. Núm. 55

do de aplicar las que señalo en este voto, conculcan  
do en perjuicio del quejoso las garantías constitu-  
cionales consignadas en los artículos 14 y 16 de la  
Constitución, por lo cual le concedo el amparo soli-  
citado.

MINISTRO DISIDENTE.

Lic. José Castro Estrada.

SENTENCIA



